



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1354

19 de Octubre de 2018

EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOLETÍN 12058-08

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1354

19 DE OCTUBRE DE 2018

ÍNDICE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOLETÍN 12058-08

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	9
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	14
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.....	20

EFICIENCIA ENERGÉTICA


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 12058-08

REFERENCIA	Sobre eficiencia energética
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Senado
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Hacienda, De Vivienda y Urbanismo, De Transportes y Telecomunicaciones, De Energía y Del Medio Ambiente
INGRESO	3 de septiembre de 2018
ARTICULADO	Siete artículos permanentes y siete transitorios

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

La eficiencia energética, considerada a nivel nacional, constituye una importante fuente de ahorro si se considera que una tera caloría (Tcal) equivale aproximadamente a 50 millones de pesos. Desde este punto de vista la intención de lograr la eficiencia en el uso de la energía es una motivación que no puede merecer reparos, y en tal sentido el proyecto de ley resulta positivo.

De hecho, los más interesados en lograr dicha eficiencia son precisamente los más grandes consumidores de energía que, voluntariamente, ya han estado aplicando técnicas con ese propósito. Pero el proyecto se refiere no solo a las grandes fábricas sino también a las viviendas nuevas, a los organismos del Estado (es importante que éstos también ahorren) y a los vehículos motorizados, incluyendo los eléctricos.

De esta forma, el enfoque general del proyecto debe entenderse como una estandarización de métodos para que el Ministerio de Energía pueda recibir la información sobre consumo energético, que obligatoriamente se le debe enviar, y así pueda elaborar las políticas de su competencia. Por cierto, esta obligación de informar pesa solo sobre grandes consumidores. Además, se establecen algunas obligaciones respecto de viviendas nuevas, como mecanismos de información al mercado, así como respecto de los vehículos, aspecto en el cual el proyecto no es todo lo completo que pudiera desearse. Ello se debe a las numerosas remisiones a un reglamento que establece el proyecto, el cual será el que, en definitiva, haga que las regulaciones tengan un alcance más concreto. Este es un aspecto que podría precisarse durante la tramitación legislativa 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

La iniciativa plantea un plan quinquenal de eficiencia energética, con indicación de metas y objetivos, aprobado por el Presidente de la República, previo informe del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (que forma parte de la institucionalidad ambiental). El respectivo decreto supremo se expedirá por el Ministerio de Energía.

ACTIVIDADES AFECTAS

Las normas del proyecto de ley se aplicarán a las siguientes actividades:

- a) A empresas con un consumo en el año anterior igual o superior a 50 tera calorías (Tcal)¹:
- b) A los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE), esto es, empresas con consumos de energía para uso final sobre 100 Tcal anuales en el año calendario anterior, o aquellas que tengan a lo menos una instalación, obra o faena con consumo energético para uso final anual igual o superior a las 50 Tcal. Los CCGE se incluirán en una resolución del Ministerio de Energía que se publicará en el Diario Oficial.
- c) A la construcción de edificaciones de tipo residencial nuevas, para cuya calificación energética se crea un registro público de profesionales, sujetos a un sistema de sanciones por infracciones en el proceso de evaluación que efectúen.
- d) A los organismos del Estado (municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos), los que deberán contar con “gestores energéticos”, de dedicación no necesariamente exclusiva, y
- e) Al parque automotriz (vehículos livianos, medianos y pesados), incluyendo vehículos eléctricos (básicamente, para efectos de compartir información o “interoperabilidad”).

¹ Véase más adelante el acápite “medición de las tera calorías” en COMENTARIOS DE MÉRITO

NORMAS PARA LAS EMPRESAS

Respecto de las empresas, se establecen las siguientes obligaciones:

- a) Obligación de informar al Ministerio de Energía, que afecta a las empresas con consumo igual o superior a las 50 Tcal; la información será anual e incluirá sus consumos por uso de energía en el año anterior así como su intensidad energética, esto es, el consumo de energía en proporción a sus ventas, en la forma y plazos que señale el reglamento.
- b) Obligación de aplicar, en el plazo de 12 meses desde la respectiva resolución que incluya a los CCGE, un Sistema de Gestión de Energía (SGE), en cada una de sus instalaciones, obras o faenas con consumo de energía igual o superior a 10 Tcal anuales, o que cubran, en su conjunto, al menos un 80% del consumo energético total del respectivo CCGE. Los SGE, por su parte, deberán señalar la política interna de la empresa, planes, metas e indicadores de eficiencia energética, así como un equipo humano, no necesariamente exclusivo encargado de la gestión, control operacional, medición y verificación de acuerdo a los requisitos, plazos y formas que señale el reglamento.

Alternativamente, los CCGE podrán acogerse a alguna norma chilena sobre sistema de gestión de energía, elaborada por el Instituto Nacional de Normalización.

NORMAS PARA LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES

Las nuevas construcciones residenciales deberán obtener, antes de su comercialización, una "calificación energética de viviendas" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También podrán, antes de la recepción final de la dirección de obras municipales, obtener una precalificación energética. La calificación definitiva deberá ser concordante o de mayor exigencia que la precalificación.

La calificación energética deberá exhibirse en los lugares de venta de las viviendas, y el informe de evaluación deberá incluirse en la respectiva escritura de compraventa.

La calificación se hará por profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Reglamento regulará los requisitos de inscripción, inhabilidades e incompatibilidades.

Las infracciones que los profesionales cometieren en el ejercicio de su función se clasificarán en leves, menos graves, graves y gravísimas; y la sanciones van desde una amonestación escrita en el Registro, en el caso de las leves, hasta la eliminación de la inscripción por hasta cinco años, en las

gravísimas, y serán aplicadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las infracciones prescribirán en el plazo de cinco años.

NORMAS PARA LOS ORGANISMOS DEL ESTADO

Las municipalidades, gobiernos regionales y demás organismos públicos antes señalados, deberán velar por el buen uso de la energía e informar al Ministerio de Energía los consumos de todas las fuentes energéticas usadas en sus inmuebles, así como la caracterización básica del inmueble, como la superficie, número de trabajadores, año de construcción, tipo de envoltente (o revestimiento).

Deberán contar con uno o más “gestores energéticos”, esto es, personal debidamente capacitado y encargado, no necesariamente con dedicación exclusiva, para coordinar la comunicación con el Ministerio de Energía, el que deberá publicar anualmente un informe sobre la gestión de energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector público.

NORMAS PARA LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS

El Ministerio de Energía deberá velar por la interoperabilidad del sistema de recarga de los vehículos eléctricos, y regular su funcionamiento.

Los Ministerios de Energía y De Transportes y Telecomunicaciones fijarán mediante resolución conjunta, los estándares de eficiencia energética para los vehículos motorizados livianos, medianos y pesados, que sean inscritos por primera vez en el Registro de Vehículos motorizados. Los estándares serán metas de cumplimiento energético promedio.

Estarán obligados a cumplir con dichos estándares los fabricantes, armadores, importadores, representantes o los emisores de los certificados de homologación individual. La fiscalización corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el incumplimiento será denunciado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para el procedimiento sancionatorio.

La sanción, en su caso, será de hasta 0,2 unidades de fomento por cada décima de kilómetro por litro de gasolina equivalente por debajo del estándar definido para un determinado año, multiplicado por

el volumen total de vehículos en dicho parque vehicular, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES

Se encomiendan a reglamentos las siguientes materias:

- 1.- Los criterios y procedimientos para la elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética;
- 2.- La forma y plazos en que las empresas que hubieren tenido un consumo igual o superior a las 50 Tcal deberán informar al Ministerio de Energía sus consumos e intensidad energética;
- 3.- Los requisitos, plazos y forma de control operacional, medición y verificación en que los CCGE deberán aplicar el SGE;
- 4.- Las condiciones bajo las cuales la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) podrá exigir, una vez al año, a los CCGE que efectúan auditorías para comprobar la exactitud y veracidad de la información que deben proporcionar al Ministerio de Energía;
- 5.- Los requisitos que deberán cumplir los auditores que realicen las auditorías indicadas en el número anterior;
- 6.- El formato, contenidos mínimos y plazos para la confección de los informes (o auditorías);
- 7.- Los criterios, formas y plazos para la preparación del informe o reporte públicos que el Ministerio de Energía deberá publicar sobre los avances y protecciones de consumo y eficiencia energética, buenas prácticas y casos de éxito, así como la clasificación de las empresas;
- 8.- Los requisitos de inscripción, causales de inhabilidad e incompatibilidad para la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
- 9.- Establecer los tipos de inmuebles de organismos del Estado, que deberán informar los consumos de las fuentes energéticas que se utilicen, así como la forma, plazo y tipo de información.
- 10.- Los requisitos, plazos [de nombramiento] y procedimientos a que estarán afectos los gestores energéticos de los organismos del Estado.
- 11.- La gradualidad en que se irán incorporando las entidades de la Administración del Estado a la obligación de informar sus consumos energéticos;

- 12.- La forma de velar por la interoperabilidad y su respectiva regulación, de los sistemas de recarga de energía de los vehículos eléctricos;
- 13.- Señalar los vehículos según marca de fabricación para los efectos del cumplimiento del estándar de eficiencia energética de los vehículos motorizados, y
- 14.- La forma y plazo para acreditar la obligación de cumplir los estándares de eficiencia energética del parque automotriz.

Además, mediante resolución de los Ministerios de Energía y De Transportes y Telecomunicaciones se fijarán los estándares de eficiencia energética para el parque automotriz.

También mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se fijará el procedimiento para la calificación y precalificación energética de viviendas ■■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

La intención del proyecto se centra en el ahorro de energía y en obtener de esa forma una mayor eficiencia. Esta, a su vez, conceptualmente, consiste en lograr un propósito preestablecido con un mínimo de recursos. En el caso de la energía se puede suponer un determinado volumen de producción medido en un tiempo específico utilizando un cierto nivel de energía. Entonces, la eficiencia consistirá en lograr el mismo volumen de producción en el mismo tiempo, pero con un menor consumo de energía.

Siendo así, para medir la eficiencia hace falta un parámetro inicial de comparación que contenga una variable temporal, otra de producción y por último la del consumo de energía. Si éste es menor, manteniéndose constantes las otras dos variables, habrá mayor eficiencia. También se podría lograr eficiencia si, con el mismo consumo energético, se obtiene un mayor volumen de producción, o se emplea un menor tiempo para producirlo.

Estos enfoques, meramente conceptuales, se perciben en el proyecto de ley, que opta sin embargo, como única forma de eficiencia, por la disminución del consumo de energía, lo que es consistente con la denominación del proyecto y los aspectos esenciales de su articulado.

Al mismo tiempo cabe señalar que el ahorro de energía es una preocupación natural en un mundo donde cada bien tiene su precio, de modo tal que no solo las dueñas de casa apagan la luz cuando no la están ocupando, sino que, principalmente, los empresarios son los grandes interesados en este ahorro por los mayores volúmenes que consumen. Desde este punto de vista, la normativa debiera

tener una finalidad más bien de coordinación, de información y de orientación al mercado, más que de una imposición legal.

En relación con este punto, vale la pena recordar la normativa ISO 50001 desarrollada por la Organización Internacional de Normalización, organización que tiene como objetivo mantener y mejorar un sistema de gestión de energía con el objeto de incentivar una mejora continua de la eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de energía y el consumo energético con un enfoque sistemático. Este estándar apunta a permitir a las organizaciones mejorar continuamente la eficiencia, los costos relacionados con energía, y la emisión de gases de efecto invernadero.

La aplicación de esta normativa actualmente es voluntaria y ya se emplea en Chile por empresas que han decidido acceder a una mayor eficiencia energética. Pero podría darse el caso que la aplicación de medidas sobre eficiencia energética generara inicialmente algunos gastos para su implementación. De esta forma, las empresas que no estén actualmente aplicando medidas de esa naturaleza, se ahorrarían los costos respectivos y podrían, -en una etapa inicial-, salir al mercado con productos a menor precio que la competencia. Pero obviamente, al momento de encontrarse en régimen todas las empresas que optaron por el ahorro energético, deberían poder ofrecer productos en mejores condiciones de mercado.

Así, en virtud de este proyecto, se equipararían los costos en eficiencia energética y se evitarían las ventajas de algunas empresas que inicialmente optaran por no invertir en medidas para lograr una

mayor eficiencia. Sin embargo, esta hipótesis requeriría de mayor información, lo que a su vez, permitiría comprender más cabalmente la conveniencia de legislar. En efecto, si una empresa en régimen, ahorra energía, ahorrará también parte de su costo y podrá producir más barato, compitiendo en mejores condiciones. Siendo así, existiría un incentivo natural al ahorro energético, respecto del cual una imposición legal debe ser analizada detalladamente.

empresas, toda vez que el umbral señalado en la ley sería más bajo (tendría tres ceros menos).

Se trata, entonces, de una materia que, desde luego, debería ser precisada durante la tramitación legislativa, lo que supone una definición sobre el más amplio o menos extenso universo sobre el que se estima debiera aplicarse la ley.

LA MEDICIÓN DE LAS TERA CALORÍAS (Tcal)

Una caloría (cal) es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua de 14°C a 15°C a 1 atmósfera de presión; ahora bien, dependiendo del alcance que se le dé a la unidad de medición, una tera caloría (Tcal) podría equivaler a 1.000.000.000.000 cal, esto es, un millón de millones, o sea un billón (10^{12}), según la nomenclatura usual en América Latina y otros países europeos; pero si se asumiera la nomenclatura vigente en Estados Unidos y Francia, donde se denomina billón a los mil millones (10^9), entonces una Tcal, equivaldría a un trillón de calorías para equiparar la cifra de 10^{12} .

En ninguna parte del proyecto se especifica si las Tcal se miden bajo el concepto norteamericano o suramericano, de manera que las 50 Tcal, que es lo que gatilla la obligación de informar los consumos al Ministerio de Energía, podrían variar entre 50×10^{12} y 50×10^9 . Si se tratara de la nomenclatura norteamericana, quedarían afectas a la obligación de informar un mayor número de

VALOR ECONÓMICO EN JUEGO

Una tera caloría (Tcal) tiene un costo de aproximadamente 50 millones de pesos, calculados a partir de los precios de un “mix” de combustibles que usan los grandes consumidores. Sobre esta base, la obligación de informar consumos al Ministerio de Energía se gatilla cuando una empresa hubiere consumido, en el año anterior, un valor cercano a las 50 Tcal, esto es, \$2.500.000.000, en las distintas formas de energía utilizables en sus instalaciones y faenas. Para dimensionar adecuadamente el impacto del proyecto de ley resulta aconsejable contar con información sobre cuántas empresas se encontrarían por sobre ese umbral de consumo energético.

Respecto de los Consumidores con Capacidad de Gestión Energética (CCGE), que quedarán obligados a aplicar un Sistema de Gestión Energética (SGE), cabe señalar que su umbral comienza en las 100 Tcal. Este sería otro dato interesante de transparentar durante la tramitación del proyecto.

OBLIGACIÓN DE ESCRITURAR LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

En el caso de las viviendas nuevas, no se establece una cifra relativa al consumo energético; lo que el proyecto exige es simplemente que los compradores tengan acceso a la calificación energética de la vivienda a la que aspiran, por lo que solo se trata de una información al comprador, lo que de todas formas resulta positiva al aportar antecedentes al momento de tomar una importante decisión como lo es la compra de una vivienda.

Sin embargo, respecto de este punto cabe señalar que el proyecto exige que la calificación energética se incluya íntegramente en la escritura de compraventa, lo que puede estimarse una medida excesiva y eventualmente costosa para el comprador, dependiendo de la extensión del certificado (las escrituras o sus copias suelen tener un cargo por foja). Puede sostenerse que bastaría con que se individualizara en la escritura el número y fecha del certificado, pero sin transcribirlo en la escritura, que es la obligación que se establece en la norma propuesta: “La calificación energética obtenida y el número del informe de evaluación energética deberán ser incluidos en la escritura pública de compraventa” (artículo 3°).

Además, tampoco se sabe qué consecuencias jurídicas tendría la eventual omisión de la calificación energética en la escritura pública de compraventa. La respuesta a esta pregunta oscila entre dos extremos, uno de los cuales podría ser pernicioso. En efecto, si la omisión de este certificado acarrearla la nulidad de la escritura, se produciría una consecuencia desproporcionada respecto de la información al consumidor. Ello podría configurar un caso similar al del decreto ley 3.516, de 1980, que declaró nulas las ventas de

predios rústicos de media Há., que no reprodujeran en la escritura la prohibición legal de alterar el destino del predio; y en el 2012 hubo que dictar una ley (N°20.623) para sanear los numerosos títulos de dominio inválidos por no haber incluido la referida prohibición en la escritura pública de compraventa. Si la nulidad de las escrituras fuera la consecuencia de omitir la certificación de calificación energética, es probable que algún día sería necesario legislar de manera similar y, en el intertanto, se impediría la venta, hipoteca u otros actos jurídicos con la viviendas cuya escritura hubiere omitido la certificación y que por lo tanto estaría viciada de nulidad.

Por otra parte, si la omisión no produce efecto jurídico alguno, entonces la norma legal no tiene sentido. Simplemente, en la práctica se va a omitir tal certificación.

Desde este punto de vista, podría argumentarse que tampoco tendría sentido la mención de número y fecha del certificado en la escritura, si la omisión de esta información tampoco produciría algún efecto jurídico.

REMISIONES AL REGLAMENTO

El proyecto de ley hace 14 remisiones al reglamento y además ordena dictar dos resoluciones. La mayoría de estas remisiones se justifican con el objeto de simplificar la ley y dejar los aspectos de detalle para su redacción por órganos dependientes del Ejecutivo.

Sin embargo, cuando una ley ha sido elaborada con la necesidad de reglamentar sus disposiciones se pueden presentar algunos inconvenientes, que convendría tener en cuenta y no abusar de las remisiones a una norma de inferior rango jurídico que la ley. A continuación se formularán algunas consideraciones generales sobre los reglamentos de ejecución de la ley y algunas observaciones específicas que afectan a las remisiones que efectúa el proyecto de ley.

CONSIDERACIONES

GENERALES

Sobre el primer aspecto, conviene recordar que la Constitución Política establece como atribución exclusiva del Presidente de la República, “dictar los reglamentos [...] que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. Es lo que se denomina potestad reglamentaria de ejecución para diferenciarla de la potestad reglamentaria autónoma, que permite al Presidente regular aquellas materias que no forman parte del dominio legal.

La potestad reglamentaria de ejecución versa necesariamente sobre materias propias de ley, respecto de las cuales ya se hubiera dictado una norma de rango legal que requiriera, para su ejecución, de normas de inferior rango jurídico.

Una primera afirmación que se puede formular a partir de la norma constitucional más arriba transcrita, es que dicha facultad está entregada exclusivamente al Presidente de la República

y que su ejercicio depende exclusivamente del juicio de conveniencia que él soberanamente formule. Desde este punto de vista, la orden legal para que se dicten determinados reglamentos es en parte superflua y en parte discordante con la Constitución, si bien no se ignora que es una práctica que a menudo se observa en nuestro sistema legislativo. Ahora bien, cuando en un proyecto de siete artículos permanentes se ordena la dictación de 14 reglamentos y más dos resoluciones, obviamente se está explotando un mecanismo de discutible procedencia y respecto del cual se requeriría la mayor información sobre el contenido de los reglamentos, sus límites o alcance y su fundamentación, así como sobre la circunstancia de que el reglamento esté realmente apoyado en el texto legal y no derive en una especie de reglamento autónomo que vaya más allá de la ley. La presente observación no se altera por el hecho de que finalmente se dicte un solo reglamento, pero que deberá abarcar las catorce materias sobre las cuales se exige el ejercicio de esta facultad exclusiva presidencial.

CONSIDERACIONES

ESPECÍFICAS

En lo más específico, merecen comentarios algunas remisiones al reglamento contenidas en el proyecto de ley.

El artículo 1° del proyecto ordena elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que deberá incluir, a lo menos, metas y objetivos a alcanzar durante el período, así como acciones

específicas de eficiencia y mediciones de los avances obtenidos; luego entrega al reglamento los criterios y procedimientos para su elaboración y ordena su dictación mediante un decreto supremo. Hasta aquí la norma propuesta parece no generar dudas sobre su alcance.

Sin embargo, el texto del proyecto no es claro en señalar qué relación tendrá el Plan Nacional de Eficiencia Energética con el Sistema de Gestión Energética (SGE) que deberán aplicar los CCGE, cuestión que también, en varios aspectos, se encarga a un reglamento. Una interpretación que puede sugerirse, es que los SGE deberán enmarcarse dentro del Plan Nacional, cuestión que no sería menor en atención a las actividades económicas involucradas. Por lo anterior debe observarse que ni el texto legal propuesto ni las remisiones a los reglamentos, cuya redacción de detalle se ignora, permiten establecer si existe o no una dependencia de los SGE respecto del Plan Nacional, y en caso afirmativo, en qué consistiría o cuál sería su alcance.

Otra remisión a los reglamentos se refiere a las condiciones bajo las cuales la SEC podrá exigir, una vez al año, a los CCGE que efectúan auditorías para comprobar la exactitud y veracidad de la información que deben proporcionar al Ministerio de Energía (artículo 2°, inciso quinto). En este caso, la única norma legal que encuadra el ejercicio de la facultad es la exigencia de una vez al año. Pero el resto de la obligación que pesa sobre los CCGE estará regulada por norma de rango inferior a la ley. De este modo, si bien la SEC no podría exigir más de una vez al año la confección de la auditoría, no queda regulado en la ley en forma precisa qué condiciones o requisitos “gatillan” la obligación de informar. Debe tenerse presente que se trata de la regulación de una actividad económica regida por el artículo 19 N°21 de la CPR que asegura

el derecho a desarrollar actividades económicas “respetando las normas legales que la regulen”, condición que no se cumple si esas normas serán de nivel reglamentario.

En materia de vivienda, un reglamento establecerá los requisitos de inscripción, causales de inhabilidad e incompatibilidad para la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos profesionales tendrán por función efectuar la calificación energética de las viviendas nuevas y –debe suponerse- emitirán un certificado al respecto, que se ordena incorporar en las escrituras de compraventa.

En este caso se trata de reglamentar el ejercicio de una actividad profesional, que, bien entendida, es también una actividad económica por parte de quien la ejerce. La norma legal propuesta permitirá inhabilitar a ciertos profesionales o hacerles incompatible su desempeño con otras funciones y, sobre todo, establecer los requisitos para inscribirse y quedar por ese hecho habilitados para efectuar la calificación energética. Ahora bien, es comprensible que deben establecerse requisitos (por ejemplo, ingeniero con determinada especialización), incompatibilidades (el evaluador energético obviamente no puede ser funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), y así con el resto del artículo; pero una cosa es que estas inhabilidades, requisitos e incompatibilidades las establezca la ley, mediante una discusión amplia y abierta, y algo muy distinto es que ello se haga por reglamento en una oficina ministerial, pues en este caso pueden existir presiones para intentar cerrar el mercado en beneficio de ciertos profesionales y en perjuicio de otros. Se trata, entonces, de una discusión que debe tener lugar abiertamente en sede legislativa y no al interior de un ministerio ■■■■

V. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- El Ministerio de Energía deberá, cada 5 años, elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que deberá incluir, a lo menos, metas y objetivos a alcanzar durante el período, acciones específicas de eficiencia energética a implementar y mecanismos de medición y verificación de los avances obtenidos, de acuerdo con los criterios y procedimientos que establezca el reglamento.

El Plan deberá ser sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad², para posteriormente ser propuesto al Presidente de la República.

El acto administrativo que deba dictarse para materializar el acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad será expedido por el Ministerio del Medio Ambiente. Un decreto supremo expedido por el Ministerio de Energía establecerá el Plan Nacional de Eficiencia Energética.

Artículo 2º- Todas aquellas empresas que hayan tenido durante el año calendario anterior un consumo energético total para uso final, igual o superior a las 50 tera-calorías³, deberán reportar anualmente al Ministerio de Energía sus consumos por uso de energía y su intensidad energética del año calendario anterior, entendida ésta última como los consumos de energía sobre sus ventas, en la forma y plazos que determine un reglamento expedido a través del Ministerio de Energía.

Anualmente, el Ministro de Energía fijará, a partir de la información proporcionada por las empresas en el inciso anterior, y mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial, el listado de consumidores que serán catalogados como “Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía”, en adelante “CCGE”, y que corresponderán a aquellas empresas con consumos de energía para uso final sobre 100 tera-calorías anuales en el año calendario anterior, o aquellas que tengan a lo menos una instalación, obra o faena con consumo energético para uso final anual igual o superior a las 50 tera-calorías.

2 El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), está presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros De Agricultura, De Hacienda, De Salud, De Economía, Fomento y Reconstrucción, De Energía, De Obras Públicas, De Vivienda y Urbanismo, De Transportes y Telecomunicaciones, De Minería y De Planificación (ley 20.417, artículo 71).

3 Una caloría (cal) es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua de 14°C a 15°C a 1 atmósfera de presión; una tera caloría (Tcal) equivale a 1.000.000.000.000 cal; esto es, un millón de millones, o sea un billón (10¹²), según la nomenclatura usual en América Latina y otros países europeos; en Estados Unidos y Francia, sin embargo, se denomina billón a los mil millones (10⁹), por lo que una Tcal, en esta nomenclatura, equivale a un trillón de calorías.

Los CCGE deberán aplicar, en el plazo de doce meses desde la publicación a que se refiere el inciso anterior, un “Sistema de Gestión de Energía”, en adelante “SGE”, en cada una de sus instalaciones, obras, o faenas con consumo de energía para uso final igual o superior a 10 tera-calorías anuales, o en aquellas que cubran, en su conjunto, al menos un 80% del consumo energético total del CCGE. El SGE deberá contar a lo menos con una política interna, planes, metas e indicadores de eficiencia energética; un equipo, no necesariamente exclusivo, encargado de la gestión de energía; control operacional, medición y verificación; de acuerdo a los requisitos, plazos y forma que señale el reglamento. A opción de los CCGE, la obligación anterior podrá también cumplirse por medio de la obtención y mantención de alguna norma chilena de sistema de gestión de energía elaborada por el Instituto Nacional de Normalización, o la institución que lo reemplace, lo cual deberá ser informado por los CCGE al Ministerio de Energía.

Los CCGE deberán enviar, anualmente, al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia, un informe con sus consumos de energía para uso final, oportunidades detectadas y acciones de eficiencia energética realizadas y proyectadas, señalando además la forma como se cumple con lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo.

El reglamento establecerá las condiciones en que la Superintendencia podrá requerir hasta una vez por año a los CCGE que efectúen auditorías para comprobar la veracidad y exactitud de la información proporcionada de acuerdo con el inciso precedente, bajo apercibimiento de multa. La contratación y financiamiento de estas auditorías corresponderá a la empresa requerida. Los requisitos que deberá cumplir el auditor que realice estas auditorías, serán definidos en el reglamento.

El Ministerio deberá resguardar la confidencialidad de la información recibida, la cual podrá utilizarse para la elaboración del Balance Nacional de Energía y para los fines descritos en el inciso séptimo del presente artículo o, previa autorización de las empresas, para otros usos. El reglamento determinará el formato, contenidos mínimos y plazos de entrega del referido informe.

Anualmente el Ministerio de Energía deberá, a partir de los informes que envíen los CCGE, preparar un reporte público en que se dé cuenta, en forma general y por sector productivo, de los avances y proyecciones de consumo y eficiencia energética, buenas prácticas y casos de éxito, así como la clasificación de las empresas, de acuerdo a los criterios, formas y plazos que determine el reglamento.

La aplicación del presente artículo y la sanción de sus infracciones corresponderán a la Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.410, sin perjuicio de la publicidad de la misma. En todo caso, toda infracción de las disposiciones de este artículo será considerada como infracción leve.

Artículo 3º.- Las edificaciones de tipo residencial nuevas deberán obtener, para su comercialización, la calificación energética de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En caso que la comercialización se efectúe con anterioridad a la obtención de la recepción final de la vivienda, podrá hacerse con una precalificación, en cuyo caso la calificación definitiva deberá ser concordante o de mejor desempeño que aquella. En ambos casos deberá exhibirse la etiqueta de calificación energética en los puntos de venta de las viviendas.

La calificación energética obtenida y el número del informe de evaluación energética deberán ser incluidos en la escritura pública de compraventa.

El Ministro de Vivienda y Urbanismo determinará, mediante resolución, el procedimiento de calificación y precalificación energética de viviendas.

Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de la calificación energética de viviendas, créase el “Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, en adelante el Registro.

La implementación y administración del Registro dependerá de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien lo hará en forma directa o a través de terceros.

El Registro regirá para todo el territorio nacional y tendrá carácter público y permanente. Mediante reglamento expedido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en función de la calidad técnica y experiencia, se establecerán entre otros, los requisitos de inscripción, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para inscribirse y mantenerse en él, las entidades o profesionales que podrán efectuar la evaluación para la emisión del informe y etiquetado, los mecanismos para su evaluación, acreditación y registro, las competencias para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la resolución a la que se refiere el inciso tercero del artículo 3 y el proceso de etiquetado, entre otros aspectos.

Las infracciones a las normas que regulen la calificación energética de viviendas se clasificarán en leves, menos graves, graves y gravísimas.

Se considerarán como infracciones leves y se sancionarán con amonestación por escrito en su expediente, aquellas actuaciones u omisiones efectuadas por un evaluador que constituyan errores menores o simples disconformidades, no significativas en la evaluación.

Se considerará como infracción menos grave y se sancionarán con la suspensión de la inscripción en el Registro, hasta por el plazo de 30 días, dejando constancia en su expediente:

- a) No cumplir con las acciones correctivas y plazos mencionados en el proceso de fiscalización dispuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- b) La reincidencia en la comisión de alguna infracción leve en tres o más ocasiones en el transcurso de un año desde la comisión de la primera infracción.

Se considerará como infracción grave y se sancionará con la suspensión de la inscripción en el Registro, hasta por el plazo de un año, dejando constancia en su expediente:

- a) Incurrir en errores u omisiones significativos que incidan en la emisión de la etiqueta o informe de evaluación energética, de tal modo que pueda inducir a error o engaño a los usuarios finales a quienes está dirigida la información que contiene.
- b) Realizar la calificación o precalificación energética de viviendas o de un proyecto de viviendas de aquellos respecto de los cuales tiene incompatibilidad para intervenir, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- c) No ejecutar la inspección visual o visita a terreno exigida para la correcta calificación energética de una vivienda, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- d) La reincidencia en la comisión de alguna infracción menos grave en más de una calificación energética.

Se considerará como infracción gravísima y se sancionará con la eliminación de la inscripción en el Registro hasta por 5 años:

- a) Adulterar documentos, planos, especificaciones o cualquier otro tipo de información que se incorpore a la calificación o precalificación energética de una vivienda.
- b) La reincidencia en la comisión de alguna infracción grave en más de una calificación energética.

La aplicación de las sanciones a las infracciones antes descritas le corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de conformidad con el procedimiento dispuesto en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la

Administración del Estado. Las notificaciones que se realicen en el marco de este procedimiento, se realizarán vía correo electrónico a la casilla que se designe para estos efectos en el proceso de calificación energética.

Las acciones para perseguir las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que se cometió la infracción.

Artículo 5°.- Las Municipalidades, Gobiernos Regionales, y las entidades regidas por el Título II⁴ del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, deberán velar por el buen uso de la energía en los inmuebles que ocupen y/o administren a cualquier título. Para ello, deberán reportar al Ministerio de Energía los consumos de todas las fuentes energéticas usadas por sus inmuebles, así como la información básica de caracterización de sus inmuebles tales como superficie, número de trabajadores, año de construcción, tipo de envolvente, entre otras. El reglamento a que se refiere el artículo 2° de la presente ley establecerá los tipos de inmuebles que deberán reportar, así como la forma, plazo y tipo de información a entregar.

Cada entidad deberá contar con uno o más encargados debidamente capacitados en eficiencia energética, no necesariamente de dedicación exclusiva, en adelante los “gestores energéticos”, que deberán coordinar la comunicación con el Ministerio de Energía. El reglamento establecerá los plazos, procedimientos y requisitos que deberán cumplir los gestores energéticos.

Para estos efectos, el Ministerio de Energía desarrollará un plan de capacitación y sensibilización en eficiencia energética para los gestores energéticos. Asimismo, deberá publicar anualmente un reporte sobre la gestión de energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector público.

El reglamento establecerá la gradualidad de incorporación de las entidades de la Administración del Estado que estarán sujetas a las obligaciones previstas en el presente artículo.

Artículo 6°.- El Ministerio de Energía deberá velar por la regulación de la interoperabilidad⁵ del sistema de recarga de vehículos eléctricos, pudiendo regular el funcionamiento de la referida

4 Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y servicios públicos.

5 En términos simples, se entiende por interoperabilidad la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos – IEEE).

interoperabilidad, así como requerir la información que a tal efecto sea pertinente a los instaladores de cargadores, todo ello en conformidad con el reglamento.

Artículo 7º.- Agréguese los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, a la letra h) del artículo 4º, del decreto ley 2.224, de 1978, que Crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser octavo y noveno, respectivamente:

“Además, el Ministro de Energía podrá fijar, mediante resolución suscrita conjuntamente con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos motorizados livianos, medianos y pesados, y sus subcategorías, que sean inscritos por primera vez en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. Dichos estándares consistirán en metas de rendimiento energético promedio, para cuya determinación se considerarán los vehículos homologados en conformidad a lo establecido por el decreto supremo N° 54, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace, y que se les haya otorgado certificados de homologación individual en cada año calendario de acuerdo a lo señalado por el decreto supremo N° 160, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace. La métrica que se utilizará para la definición de estos estándares será el rendimiento energético en kilómetros por litros de gasolina equivalente y su equivalencia en gramos de CO₂ por kilómetro, lo que será determinado usando los valores obtenidos en la homologación del vehículo de que se trate.

Los responsables del cumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular serán los fabricantes, armadores, importadores, representantes o los emisores de los certificados de homologación individual, para cada marca, según corresponda, de acuerdo a lo que señale un reglamento expedido por el Ministerio de Energía y además suscrito por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. La fiscalización del cumplimiento de los estándares de eficiencia energética del parque vehicular le corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que, en caso de constatar el incumplimiento de los referidos estándares, oficiará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a fin de que esta inicie el respectivo procedimiento sancionatorio, de proceder.

La sanción que impondrá la Superintendencia por el incumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular, será de hasta 0,2 unidades de fomento por cada décima de kilómetro por litro de gasolina equivalente por debajo del estándar definido para un determinado año, multiplicado por el volumen total de vehículos en dicho parque vehicular, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento. A su vez, el Ministerio de Energía deberá publicar anualmente el nivel de cumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular para los fabricantes, armadores, importadores o los representantes de cada marca, según corresponda.

Para acreditar el cumplimiento de la obligación señalada en este artículo, los responsables podrán contar hasta tres veces el rendimiento de cada vehículo eléctrico o híbrido con recarga eléctrica

exterior respecto del cual se haya otorgado un certificado de homologación individual, en la forma y por los plazos que señale el reglamento antes referido.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá pronunciarse sobre los estándares de eficiencia a que se refiere la presente letra.”⁶.

6 Artículo 4°.- Para el cumplimiento de su objetivo corresponderá al Ministerio, en particular las siguientes funciones y atribuciones:

-h) Fijar, mediante resolución, los estándares mínimos de eficiencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su comercialización en el país.

Los importadores, fabricantes y distribuidores, según corresponda, de los bienes señalados en el párrafo anterior, que persigan su comercialización en el territorio nacional, deberán certificar para dicho efecto que cumplen con el estándar exigido, por intermedio de entidades autorizadas para ello y etiquetar los respectivos productos con las indicaciones del consumo energético de los mismos, cuando así se establezca de conformidad con lo dispuesto en la letra precedente [esto es, participar en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro para la investigación en materia energética].

Además, el Ministro de Energía podrá fijar, mediante resolución suscrita conjuntamente con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos motorizados livianos, medianos y pesados, y sus subcategorías, que sean inscritos por primera vez en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. Dichos estándares consistirán en metas de rendimiento energético promedio, para cuya determinación se considerarán los vehículos homologados en conformidad a lo establecido por el decreto supremo N° 54, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace, y que se les haya otorgado certificados de homologación individual en cada año calendario de acuerdo a lo señalado por el decreto supremo N° 160, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace. La métrica que se utilizará para la definición de estos estándares será el rendimiento energético en kilómetros por litros de gasolina equivalente y su equivalencia en gramos de CO₂ por kilómetro, lo que será determinado usando los valores obtenidos en la homologación del vehículo de que se trate. Los responsables del cumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular serán los fabricantes, armadores, importadores, representantes o los emisores de los certificados de homologación individual, para cada marca, según corresponda, de acuerdo a lo que señale un reglamento expedido por el Ministerio de Energía y además suscrito por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. La fiscalización del cumplimiento de los estándares de eficiencia energética del parque vehicular le corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que, en caso de constatar el incumplimiento de los referidos estándares, oficiará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a fin de que esta inicie el respectivo procedimiento sancionatorio, de proceder.

La sanción que impondrá la Superintendencia por el incumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular, será de hasta 0,2 unidades de fomento por cada décima de kilómetro por litro de gasolina equivalente por debajo del estándar definido para un determinado año, multiplicado por el volumen total de vehículos en dicho parque vehicular, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento. A su vez, el Ministerio de Energía deberá publicar anualmente el nivel de cumplimiento del estándar de eficiencia energética del parque vehicular para los fabricantes, armadores, importadores o los representantes de cada marca, según corresponda.

Para acreditar el cumplimiento de la obligación señalada en este artículo, los responsables podrán contar hasta tres veces el rendimiento de cada vehículo eléctrico o híbrido con recarga eléctrica exterior respecto del cual se haya otorgado un certificado de homologación individual, en la forma y por los plazos que señale el reglamento antes referido.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá pronunciarse sobre los estándares de eficiencia a que se refiere la presente letra.

Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Energía, se establecerá el procedimiento y las demás normas necesarias para la aplicación de los preceptos establecidos en esta letra. Dicho reglamento deberá contemplar, a lo menos:

- i) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño del estándar mínimo de eficiencia energética, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con su determinación.
- ii) La forma cómo se comprobará la adecuación de estándar mínimo de eficiencia energética, a los estándares internacionales en la materia.
- iii) El mecanismo de participación del público interesado en la determinación del estándar, considerando las dimensiones informativa, consultiva y resolutive.
- iv) La forma de publicidad del programa de implementación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- El Ministerio de Energía deberá someter al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, en un plazo no superior a 18 meses contados desde la publicación de esta ley.

Artículo segundo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 2° comenzará a regir en el plazo de 6 meses contados desde la publicación de esta ley.

Artículo tercero transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 3° comenzará a regir en el plazo de 18 meses contados desde la publicación de esta ley.

Artículo cuarto transitorio.- La resolución que establece el procedimiento de calificación y precalificación energética de viviendas será dictada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en un plazo de 18 meses, contados desde la publicación de esta ley.

Artículo quinto transitorio.- El reglamento del registro nacional de evaluadores energéticos de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, deberá ser dictado en un plazo de 18 meses contados desde la publicación de esta ley.

Artículo sexto transitorio.- El primer estándar de eficiencia energética para el parque de vehículos motorizados empezará a regir desde el año 2021.

Artículo séptimo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Energía. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.LYD.ORG

ACÁ PODRÁS ENCONTRAR TODOS NUESTROS
ESTUDIOS, ANÁLISIS DE LA CONTINGENCIA,
COLUMNAS DE OPINIÓN Y MUCHO MÁS!



LIBERTAD Y DESARROLLO
Alcántara 498, Las Condes | Santiago de Chile
Fono: +56 2 2377 4800 | E-mail: lyd@lyd.org

LD
LIBERTAD Y DESARROLLO

